

## **INTERVENCION**

### **FINANCIAMIENTO FUERZAS ARMADAS**

**15 DE ENERO 2019**

Señor presidente:

El presente proyecto traía esperanzas de terminar con las prerrogativas de financiamiento de nuestras fuerzas armadas, junto con acabar con la injustificada mochila que pesa sobre nuestra empresa pública del Cobre Nacional, de estar afectada con un impuesto obligatorio del 10% de sus ventas, la llamada Ley Reservada del Cobre, donde dicho porcentaje iba a parar a las arcas de nuestras Fuerzas Armadas.

La propuesta si bien crea un nuevo régimen presupuestario de las tres ramas, nos sorprendimos que aún se mantiene en ella la afectación del 10%, que ahora sería destinada a las arcas fiscales de manera transitoria por doce años. Creo que este es

un mal inicio del debate, ya que no se justifica que se mantenga esta carga a la empresa, ese dinero podría ser destinado para modernizar y revitalizar Codelco, lo cual, garantizaría, a mediano plazo, un aumento en utilidades que permiten mejorar la recaudación fiscal.

Pero compartimos el diagnóstico de la necesidad de establecer un sistema democrático de financiamiento de las Fuerzas Armadas, que sea justo, transparente y con un fuerte control de las autoridades políticas, tanto del ejecutivo como del Congreso, lo que ha sido una lucha historia de nosotros los socialistas. Pero creemos que el modelo propuesto dista mucho de estos objetivos por las siguientes razones:

No se justifica que se mantengan los gastos permanentes, estableciendo pisos mínimos para los gastos generales de las fuerzas armadas, lo cual mantiene un privilegio en relación a otros organismos. Además, dicho piso mínimo viene fijado desde la ley de presupuestos del año 1989, previamente

reajustado. En la discusión de la ley de presupuesto, ha quedado claro que no existe certeza de este piso mínimo y de su forma de cálculo. La existencia de estos gastos, coarta las atribuciones del Congreso de poder definir el presupuesto de la nación, creando situaciones injustas, por lo cual se debería suprimir.

La propuesta del ejecutivo, reemplaza el sistema de financiamiento por dos fondos, el primero, el fondo plurianual de capacidades estratégicas de la defensa que tiene por objeto la adquisición de armamento junto al fondo de contingencia.

El fondo plurianual para compra de armamento belico, se ejecutará dentro de un plan de inversiones de 4 años, donde también se establece un piso mínimo no menor al 70% del promedio de gastos realizadas por ley reservada entre 2010-2017, siendo este un segundo privilegio, el cual se encuentra fuera del control democrático del Congreso, donde nos gustaría escuchar las razones de este mínimo. Entonces,

ahora si bien la carga no será para Codelco, será de cargo del erario fiscal, para asegurar esos mínimos. Asegurar pisos puede incentivar la compra de armamento de forma no planificada, solo para cumplir con la ejecución del fondo, sin atender las necesidades anuales que puedan existir de defensa, contraponiéndolo a otras necesidades del país.

Este fondo será administrado por un órgano “técnico” de tres personas, designadas por el Presidente, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Hacienda. Seamos sinceros, un órgano nombrado solo por el gobierno no puede llamarse “técnico”, ya que claramente es político. El proyecto no establece que conocimientos deberían tener estos, para llamarse técnicos. Es claro, que este órgano debe ser de confianza, dada la tarea encomendada, pero no puede limitarse a que solo un poder del estado designe a sus miembros en su totalidad.

Otro punto, que no me queda claro, es como quedará supeditado dicho fondo a una Estrategia de Defensa, la cual, habría sido eliminada en la discusión legislativa. Creo que se debe mantener una Estrategia, definido por el poder ejecutivo junto al Congreso, para tener una visión de largo plazo de las necesidades defensa en nuestro país.

El otro fondo, el de contingencia, será utilizado para situaciones de crisis o catástrofe para anticipar la compra bélica. ¿Cuál será el incentivo de control de su buen uso? Me preocupa que este fondo pueda ser utilizado indiscriminadamente, así que me causa bastantes reparos su incorporación.

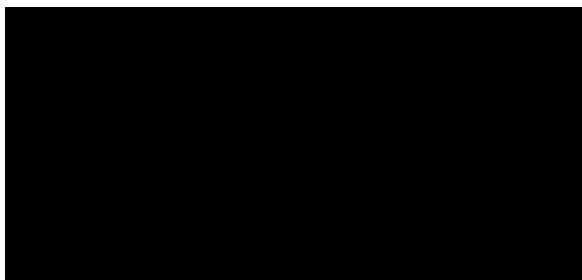
En cuanto a los gastos reservados, estos se mantendrán, lo cual comparto. Dichos gastos serán definidos anualmente por el Ministerio de Defensa por decreto supremo, el cual se “se rendirá cuenta anual, secreta y desagregada, a la Contraloría General de la República,”. ¿Si estos gastos son

definidos por el Ministerio, porque se omite a este Ministerio de su forma de control?

La propuesta del gobierno puede ser un aporte, pero no pasa el test democrático, manteniendo, de cierta forma, el modelo de financiamiento privilegiado para nuestras Fuerzas Armadas, que proviene de la dictadura.

OPCION VOTO: Apoyare, con estos reparos, para que lo podemos mejorar en la discusión en particular.

EN CONTRA, debido a las razones esgrimidas, ya que no podemos avalar que a Codelco se siga asfixiando ni amparar una situación privilegiada de financiamiento de las fuerzas armadas.



INTERVENCION

PROCEDIMIENTO DE TUTELA DERECHOS

FUNDAMENTALES

Señor Presidente:

Pareciera que existiesen dos categorías de trabajadores. Unos, que cuentan con plenos reconocimiento de sus derechos, que son los trabajadores privados regulados por el código del trabajo, y otros, que son los funcionarios regulados por el estatuto administrativo.

Estos últimos, no tienen derecho a indemnización, pueden ser despedidos discrecionalmente por el gobierno de turno, sin tener facultades mayores para poder reclamar ante los tribunales gracias a la decisión del Tribunal Constitucional.

La defensa de los funcionarios desvinculados que están a contrata, es que Contraloría tiene facultades para declarar

la ilegalidad de las desvinculaciones, mientras que los trabajadores a honorarios el asunto se somete directamente al conocimiento de los juzgados del trabajo.

Pero aparte, gracias a la Corte Suprema, los funcionarios públicos despedidos arbitrariamente, tenían como defensa, fuera de contraloría, los tribunales del trabajo a través del procedimiento de tutela de derechos fundamentales, donde se podía decidir reintegrarlos, junto con derecho a una indemnización por el daño moral sufrido.

Como dijimos anteriormente, la aplicación de dicho procedimiento fue declarada como extensiva a los funcionarios públicos por los tribunales superiores de justicia, especialmente, la Corte Suprema. Este tribunal superior, desde el año 2014, consideraba la aplicación de la tutela, procedimiento que busca resguardar los derechos fundamentales de los trabajadores, salvaguardando que no



sean perseguidos por sus opiniones políticas, religiosas, o cualquier tipo de discriminación.

Pero todo esto termino por decisión del tribunal constitucional, quien excluyó a estos trabajadores de esta defensa, justo en el momento en que el gobierno de Piñera se encontraba despidiendo a cientos de funcionarios por motivos políticos, lo cual vulnera la igualdad ante la ley.

Lo que realizo el tribunal constitucional es preocupante, ya que no solo se contenta con coartar las funciones legislativas del congreso, como ha pasado en diversos proyectos de ley, sino que ahora también es un órgano que interpreta cualquier norma del ordenamiento jurídico, controlando ahora el alcance que tiene una norma del código del trabajo.

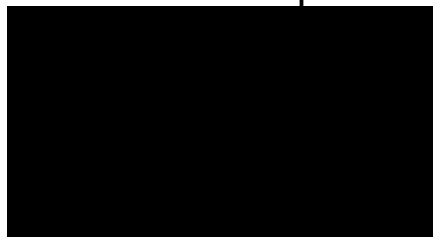
Por esto, es que es necesario, que el poder legislativo, en uso de sus facultades, dicte una ley interpretativa que zanje finalmente este problema. Porque somos el órgano

democrático en el cual el pueblo deposita la voluntad soberana, por cuanto podemos determinar el alcance de una norma, cuando existan interpretaciones disimiles, como existe hoy.

Señor presidente, 5.000 funcionarios públicos han perdido su trabajo, concentrándose la mayoría en el mes de diciembre. Esto es horrible, al dejar sin sustento económico a miles de familias, las cuales han pasado una mala navidad, año nuevo y futuras vacaciones, por esta decisión arbitraria. Esto es una persecución indiscriminada, ya que funcionarios que han estado pronto a jubilar o que llevan años, también han perdido sus puestos.

Nuestros funcionarios públicos necesitan tener justicia y resguardo de sus derechos, nuestros funcionarios necesitan dignidad igual que cualquier trabajador de Chile

Por esto es que votare a favor.



## Minuta Abuso sexual Residual.

---

### 1. Antecedentes.

El objetivo es incorporar una figura que sancione las tocaciones indebidas, agarrones, de connotación sexual que reciben las mujeres en espacios públicos, y que hoy los victimarios son absueltos del delito de abuso sexual o derechamente formalizados por el delito o la falta de “Ofensas al pudor y las buenas costumbres”, delito que cautela un bien jurídico distinto a la indemnidad sexual, el cual, justamente, es el bien jurídico ofendido y transgredido cuando se efectúan tocaciones indebidas, presión de genitales contra el cuerpo de la víctima y roces con connotación sexual

También se nos presenta el problema de cuando el agresor se masturba en un espacio público o de libre acceso al público y eyacula sobre la víctima, situación que ha sido reportada numerosas veces al Observatorio contra el Acoso Callejero, fundación que orienta a las víctimas cuando sufren este tipo de delitos.

La propuesta de la moción crea un nuevo tipo penal de **abuso sexual residual**, cuando la víctima mayor de 14 años de edad, es afectada, sin que medien las circunstancias de la violación o el estupro, que en la actualidad no es sancionado, por lo cual frente a la duda si la víctima tuvo o no incapacidad de oponerse <sup>1</sup>, el victimario es absuelto<sup>2</sup>, donde solo es sancionado cuando la víctima es menor de 14 años (se conoce como abuso impropio<sup>3</sup>).

---

<sup>1</sup> Pasaba mucho en los casos de que la víctima este drogada o con alcohol.

<sup>2</sup> Se adjunta informe de la BCN

<sup>3</sup> ART. 366 bis. “El que realizare una acción sexual distinta del acceso carnal con una persona menor de catorce años, será castigado con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo.

## **2. Historia del tipo.**

### **a. Moción original.**

La moción original, lo expresaba de esta manera:

“Artículo 389 sexies.- El que cometiere acoso sexual callejero consistente en un acto que involucre el contacto corporal de carácter sexual, como tocaciones indebidas, roces o presión de genitales contra el cuerpo de otra persona, será sancionado con presidio menor en su grado mínimo.”

Según la moción:

**“INCORPORA DELITO:** Crea el delito de acoso sexual callejero en el Código Penal, considerando actos con contacto físico como tocaciones indebidas, “agarrones”, roces o “punteos”.

- **Sanción:** presidio menor en su grado mínimo, de 61 a 540 días, sin perjuicio de poder aumentarse en un grado esta pena, mediando las circunstancias detalladas en el proyecto.

Acoso sexual callejero consistente en actos que involucren el contacto físico de carácter sexual, como tocaciones indebidas, roces o presión de genitales contra el cuerpo de otra persona.”

### **b. Propuesta Cámara Diputados.**

Luego la comisión de seguridad ciudadana de la Cámara, presentó una indicación sustitutiva en el siguiente sentido:

“Agrégase el siguiente artículo 366 sexies:

*“Art. 366 sexies. El que realizare una acción sexual que implique un contacto corporal contra una persona mayor de 14 años que provoque en la víctima intimidación, hostilidad, degradación, humillación, o un ambiente ofensivo, sin que medien los términos señalados en el artículo 366 ter, será penado con presidio menor en su grado mínimo.”*

El informe de la Comisión, lo explica: “Como **elementos centrales y sustantivos** de esta indicación, se debe consignar que establece un nuevo tipo penal, tomando como modelo de redacción los actualmente vigentes en el Código Penal, respecto del abuso sexual en contra de mayores de 14 años, sin exigir las condiciones de relevancia y/o significación sexual, consagrados en el art. 366 ter, lo que permite llenar el vacío legal que al respecto existe hoy en nuestro país.”

### **c. Propuesta Comisión de Género.**

En la Comisión de Género se presentó una indicación<sup>4</sup>, mejorando su redacción, según los comentarios realizado en la Comisión.

Agréguese un inciso final al artículo 366 del siguiente tenor:

*“Cuando no concurran las circunstancias señaladas en los incisos anteriores, si el abuso consistiera en una acción sexual que implique una afectación corporal con una víctima mayor de 14 años, siempre que se proceda por sorpresa, engaño o utilizando otras maniobras que no supongan consentimiento de la víctima, será penado con presidio menor en su grado medio.”*

¿Qué hace?

- Traslada la figura al artículo 366, que sanciona los abusos sexuales bajo circunstancias. Esto permite que esta figura solo pueda ser sancionada previa denuncia de la víctima (no puede actuar fiscalía de oficio)

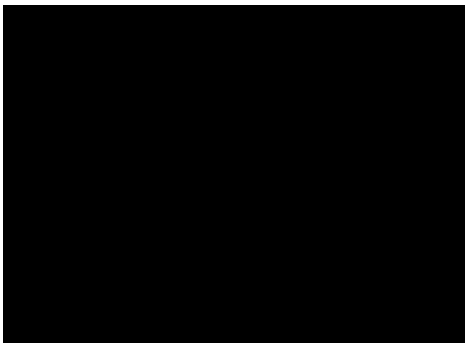
---

<sup>4</sup> Fue suscrita por todas las senadoras de la Comisión, excepto Von Baer.

- Modifica “contacto corporal” por “afectación corporal”, ya que puede que no haya un contacto directo que implique abuso. Por ejemplo: a través de instrumentos.
- Se eliminan los requisitos subjetivos de que la víctima haya sentido “intimidación, *hostilidad, degradación, humillación, o un ambiente ofensivo*”, lo cual solo daba una carga mayor de prueba.
- Se agregan medios de comisión: “*por sorpresa, engaño o utilizando otras maniobras que no supongan consentimiento de la víctima*” con el objeto de clarificar las maneras que se puede realizar, recogiendo las propuestas de otras indicaciones (Senadora Durana y Bianchi).

### 3. **Soluciones.**

En la Comisión la figura ha recibido críticas, por lo cual es necesario proponer una redacción alternativa que permita sancionar estas conductas, las cuales no serían abarcadas por la propuesta del art. 489, que sanciona los acosos verbales o con otros gestos, o abordajes o persecuciones intimidantes.



## **Minuta PL Incitación al Odio y Negacionismo (Boletín 11424)**

---

**Ingreso:** 6 de septiembre de 2017.

**Primer trámite.** Cámara

**Origen:** Mensaje

El proyecto nace en el gobierno de Bachelet, que tiene por objeto la “sanción penal para aquellos discursos que, conforme a la terminología del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana, consistan en una apología del odio que constituya una incitación de tal magnitud, que pueda desencadenar en actos de violencia o cualquier otra acción ilegal similar que afecte a un grupo de personas o a un miembro de ese grupo.”.

### **I. Contenido.**

#### **1. Crea un delito de incitación al odio.**

Sanciona a quien públicamente haga un llamado a promover la intolerancia hacia grupos vulnerables, incitando la violencia física en contra de estos, a causa de expresiones racistas o que tengan como base la identidad nacional o étnica, el sexo, la orientación sexual, identidad de género o la religión o creencias de la víctima. Este delito es sancionado con presidio menor en grado mínimo (61 días a 540), aumentando en un grado cuando lo realice un empleado público.

Para lo anterior, elimina el art. 31 de la ley de libertad expresión, que sanciona las publicaciones o transmisiones destinadas que promueven el odio u hostilidad.

Además, se incorpora este delito para condenar a las personas jurídicas, para que las empresas prevengan prácticas discriminatorias en ese sentido.

## **2. Tipificación del negacionismo.**

En la Comisión de DDHH de la Cámara fue ingresada una indicación por la diputada Hertz, que tipifica el negacionismo, en el siguiente sentido:

“La justificación o negación de las violaciones a los derechos humanos cometidas entre el 11 de septiembre 1973 y el 11 de marzo de 1990 que estén consignadas en los informes (Retting y Valech) de las comisiones nacionales, la cual es sancionada una multa hasta tres años de cárcel”

## **II. Comentarios.**

La discusión se ha centrado si estos delitos, sobre todo el de negacionismo, si infringe o no la libertad de expresión.

A nivel internacional, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, admite restricciones a la libertad de expresión para asegurar el respeto a las personas o la protección a la seguridad nacional o el orden público. **Además, en su artículo 20, obliga a prohibir por ley toda apología al odio nacional, racial o religioso que constituya incitación al odio.** El Pacto de San José de Costa Rica se pronuncia en el mismo sentido.

Naciones Unidas, en el año 2005, instó a sus Estados Miembros a “***que rechacen sin reservas cualquier negación como hecho histórico***” del holocausto. En el mismo sentido, la Unión Europea resuelve en 2008, que los Estados miembros sancionen la “apología pública, la negación o la trivialización flagrante de los crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra”.



Siguiendo dicha recomendación, es que Alemania creó un delito para sancionar a quien aprueba, niega o minimiza públicamente los delitos cometidos durante el régimen nazi o quien lo glorifique; mientras que Francia sanciona a quien haga pública apología a crímenes de lesa humanidad. En el mismo sentido, tenemos los casos de las legislaciones de Suiza y Holanda.

En general, se permiten restricciones a la libertad de expresión en el código penal, cuando esto signifique injuriar a otro, o cuando las mismas signifiquen amenazas. El proyecto, solo es criticable desde una visión política-liberal, ya que se dice que esto coartaría el debate en torno a las violaciones de los derechos humanos en dictadura (C. Peña), lo cual no comparto, ya que la moción no prohíbe su discusión, sino que solo su negación. Además, existen países que han recogido dicha tipificación.

